

27-Sept-88

NUEVA MASACRE ATRIBUIDA A LA FUERZA ARMADA

El miércoles 21 de septiembre, efectivos militares del batallón Jiboa capturaron a decenas de campesinos, los vendaron e interrogaron y, poco después, los mataron. La FA dio dos versiones del hecho, retractándose en la segunda de lo que dicho en la primera. Los campesinos, testigos y víctimas de los hechos, se atrevieron a decir ante la televisión lo que acababan de experimentar. Tutela Legal del Arzobispado volvió a dar muestra de su diligencia, objetividad y valentía al ir al lugar de los hechos y recabar pruebas. El presidente Duarte trató de desviar la atención con la disculpa de que no sabía lo que realmente había sucedido y que ordenaba una investigación exhaustiva. La FA y la Fiscalía han iniciado las investigaciones pertinentes, pero no se espera mucho de su celo inquisitivo, dados los precedentes.

La FA en estos últimos ocho años ha cometido verdaderas masacres contra la población civil indefensa. Unas absolutamente monstruosas por el número de víctimas, la sinrazón de las acciones y la crueldad de las mismas. Entre otras están los casos del Sumpul, del Mosote y de Las Hojas. Pero esto parecía ser cosa del pasado. Supuestamente por presión norteamericana y la de todo el mundo democrático, el gobierno democristiano y la FA habían intentado dar otra imagen en la cuestión de los derechos humanos y en el modo de relacionarse con la población civil. Sin embargo, empiezan a darse signos continuados de que se quiere volver a las prácticas criminales, que pusieron en la picota internacional a El Salvador.

El 6 de abril pasado nos preguntábamos editorialmente "¿Qué le vuelve a pasar a la Fuerza Armada de El Salvador?" (Proceso, 330). Y el 21 de septiembre dedicábamos el editorial a la represión innecesariamente violenta de la Policía Nacional en contra de una manifestación de la Universidad de El Salvador. En esas y otras ocasiones hemos analizado los hechos y aventurado hipótesis sobre las causas de los mismos. No se trata de hechos aislados sino de secuencias, que apuntan a nuevas tácticas y aun tal vez a incipientes cambios de estrategia, tanto más cuanto que la FA y el presidente Duarte, lejos de condenar los hechos, tratan de defenderlos.

Se han juntado, en efecto, diversas circunstancias que sitúan a El Salvador en una coyuntura peligro-



27-Sept-88

NUEVA MASACRE ATRIBUIDA A LA FUERZA ARMADA

El miércoles 21 de septiembre, efectivos militares del batallón Jiboa capturaron a decenas de campesinos, los vendaron e interrogaron y, poco después, los mataron. La FA dio dos versiones del hecho, retractándose en la segunda de lo que dicho en la primera. Los campesinos, testigos y víctimas de los hechos, se atrevieron a decir ante la televisión lo que acababan de experimentar. Tutela Legal del Arzobispado volvió a dar muestra de su diligencia, objetividad y valentía al ir al lugar de los hechos y recabar pruebas. El presidente Duarte trató de desviar la atención con la disculpa de que no sabía lo que realmente había sucedido y que ordenaba una investigación exhaustiva. La FA y la Fiscalía han iniciado las investigaciones pertinentes, pero no se espera mucho de su celo inquisitivo, dados los precedentes.

La FA en estos últimos ocho años ha cometido verdaderas masacres contra la población civil indefensa. Unas absolutamente monstruosas por el número de víctimas, la sinrazón de las acciones y la crueldad de las mismas. Entre otras están los casos del Sum-pul, del Mosote y de Las Hojas. Pero esto parecía ser cosa del pasado. Supuestamente por presión norteamericana y la de todo el mundo democrático, el gobierno democristiano y la FA habían intentado dar otra imagen en la cuestión de los derechos humanos y en el modo de relacionarse con la población civil. Sin embargo, empiezan a darse signos continuados de que se quiere volver a las prácticas criminales, que pusieron en la picota internacional a El Salvador.

El 6 de abril pasado nos preguntábamos editorialmente "¿Qué le vuelve a pasar a la Fuerza Armada de El Salvador?" (Proceso, 330). Y el 21 de septiembre dedicábamos el editorial a la represión innecesariamente violenta de la Policía Nacional en contra de una manifestación de la Universidad de El Salvador. En esas y otras ocasiones hemos analizado los hechos y aventurado hipótesis sobre las causas de los mismos. No se trata de hechos aislados sino de secuencias, que apuntan a nuevas tácticas y aun tal vez a incipientes cambios de estrategia, tanto más cuanto que la FA y el presidente Duarte, lejos de condenar los hechos, tratan de defenderlos.

Se han juntado, en efecto, diversas circunstancias que sitúan a El Salvador en una coyuntura peligro-



sa. La administración Reagan está más preocupada por el triunfo de Bush que por la gestión de lo que ha sido hasta ahora su política. El embajador norteamericano en El Salvador está recién llegado y aún no ha tomado las riendas que dejó abandonadas su antecesor. El limitado triunfo de ARENA en las últimas elecciones ha sido interpretado por algunos como una carta blanca para volver a prácticas represivas. La enfermedad del presidente Duarte le hace todavía más débil y vulnerable en su relación con los militares. Los partidos políticos están más interesados en ganar las elecciones de marzo que en complicarse la vida con los poderes fácticos. El FMLN vuelve a mostrar una mayor capacidad militar (Tejutepeque, El Paraíso, El Aguacate, paro del transporte, etc.). Los integrantes de la tándem, connotados algunos de ellos, no sólo por su derecho y su propensión a medidas militaristas, sino por su participación en la guerra sucia, se han acercado decisivamente a la cúpula del poder militar. Crece la organización popular y se hace sentir su fuerza en las calles de la capital.

Todo ello hace que estemos en una coyuntura donde algunos pretenden aprovecharse de la confusión y de la debilidad para entrar en un camino, del que costaría mucho salir. Y esto sería trágico para El Salvador. Las fuerzas moderadas y moderadoras están perdiendo presencia y poder, lo cual permite a las fuerzas extremistas, deseosas de revivir el espíritu y la sangre de los escuadrones de la muerte, salir a un primer plano y tomar la iniciativa.

De momento esto se presenta como un rebrote del militarismo y de un militarismo duro. La FA parece haberse cansado de mantener un cierto grado de tolerancia frente a las movilizaciones, tratando de atemorizar aun a quienes quieren manifestar de manera no violenta su disconformidad, temerosa tal vez de que se esté preparando una insurrección popular. También la FA parece temer un mayor apoyo de los campesinos al FMLN, a la par que siente herido su amor propio y aun su solidaridad institucional por los fuertes golpes que ha venido recibiendo. Quizá en este punto también teme que el FMLN inicie una ofensiva estratégica.

Este militarismo contradice el avance en el proceso democrático. Los más de doscientos estudiantes detenidos e inculcados por la FA de ser subversivos y violentos, tuvieron que ser puestos en libertad al no darse fundamento que mereciese, ni siquiera su enjuiciamiento. Esto tiene su lado positivo por cuanto la FA no se ha tomado la justicia por su

mano, pero muestra lo equivocada que puede estar en sus acciones precipitadas. La muerte criminal de los diez campesinos en la jurisdicción de San Sebastián ya ha mostrado lo malo de ese militarismo. Ojalá la condena pronta de los culpables -y no con envío de los mismos a puestos confortables en las embajadas- sirva de contraparte a hechos tan lamentables e indiquen el cambio de una tendencia tenebrosa, que va apareciendo cada vez con mayor claridad.

A este propósito la FA debe leer con detención el proyecto de resolución sobre los derechos humanos, aprobado por la subcomisión correspondiente de la ONU (Proceso, 353, 14-15). Y debe prestar mucha atención al párrafo en el que confirma que "las personas que no participan directamente en los combates, aunque simpaticen con los insurgentes, los acompañen, les suministren alimentos y habiten en zonas controladas por ellos, conservan su carácter de población civil y, por lo tanto, no deben ser objeto de ataques militares y de asedios por las fuerzas gubernamentales". Cuanto menos de acciones criminales.

Estamos en un momento de transición y, como tal, en un momento peligroso. Toca al presidente Duarte hacer un esfuerzo último para poner a los militares en el sitio que les corresponde; bien sabe que no ha podido castigar seria y públicamente a ninguno de los que no se ignora su culpabilidad en masacres anteriores, mirando más por la justicia y por los campesinos que por estar a bien con la FA.

Pero toca muy especialmente a ARENA defender a la FA como ésta debe ser defendida, no ocultando sus crímenes cuando se den, sino condenándolos y esforzándose por hacer de la institución armada una institución profesional, legal, moral y políticamente irreprochable. En esos cuatro apartados tiene mucho que mejorar la FA y luchar por esa mejora es defenderla. Ocultar sus fallos y delitos y, lo que sería peor, disculparlos o alabarlos, sería un cobarde y lamentable servicio a la patria y a la FA.

La embajada de Estados Unidos debiera tomar buena nota de todo esto, porque el pueblo salvadoreño vuelve a sentir en su propia carne, lo que padeció inmisericordemente en los años más negros de su historia. Aún se está a tiempo de controlar las fuerzas más oscuras y de apostar por un verdadero proceso democrático. La clave de ello no está en los escuadrones de la muerte desvinculados de la FA. Esos escuadrones de la muerte no están en capa-



Todo esto está en juego en acciones, como las que últimamente ha emprendido la FA.

